

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501520170086601, promovido por **CINDY YULIANA POSADA ROJAS** en nombre propio y en representación de sus hijos menores **YEISON ESTIVEN ACEVEDO POSADA** y **YEFERSON ACEVEDO POSADA** en contra de **PORVENIR** con el fin de resolver los recursos interpuestos por los apoderados de las partes en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **285**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, se solicitó se declare que la señora Cindy Yuliana Posada Rojas le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente causada por la muerte del señor Gildardo Antonio Acevedo González desde el 17/03/2009, por lo cual, se ordene el pago de dicho valor de manera retroactiva con los intereses de mora respectivos y con las mesadas pensionales adicionales.

Subsidiario a ello, peticiona se incremente la mesada pensional de los menores en un 100%, con el pago del retroactivo correspondiente.

Como fundamento fáctico de lo pretendido, expuso que, el señor Gildardo Antonio Acevedo González fue su compañero permanente por espacio superior a cinco años, y de dicha unión marital se procrearon dos hijos. Ante el fallecimiento del afiliado y habiendo dejado causado los requisitos para ello, solicito el reconocimiento del pago de la pensión de sobreviviente, pero se reconoció tan solo a los hijos menores en cuantía de 25% cada uno, en razón a 14 mesadas pensionales y sobre el salario mínimo legal mensual vigente, negándose la pensión a la reclamante y solicitándose que allegara sentencia ejecutoriada de la unión marital de hecho con el causante.

Admitida la demanda, y notificado el fondo pensional, contestó el libelo gestor indicando que, la demandante no acredita los cinco años de convivencia solicitados en la norma, y que en el transcurso de la investigación realizada por la entidad se logró establecer ello. Argumentó que no se opone a la prosperidad de las pretensiones respecto al pago del 50% porque se encuentra en suspenso, por lo que, de no ser la demandante beneficiaria de la prestación, se pagaría a los menores. Interpuso las excepciones de: “*falta de causa para pedir*”, “*inexistencia de la obligación*”,

“buena fe”, “cobro de lo no debido”, “pago”, “compensación”, “prescripción”, “incompatibilidad entre la indexación y los intereses moratorios reclamados”, “innominada o genérica”

Mediante sentencia del veinte (20) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a la accionada de las pretensiones invocadas por la señora Cindy Yuliana Posada Rojas y ordenó el acrecimiento pensional de la mesada que a la fecha reciben los menores sobre el valor que, se encontraba en reserva, con un retroactivo en suma de \$22.318.146 a cada uno desde el 17 de marzo del año 2009 y el 31 de mayo del año 2019, ordenando el reajuste del descuento por salud sobre el retroactivo y condenó en costas a la pasiva.

RECURSO DE APELACIÓN

En contra de dicha providencia, el procurador judicial de la parte actora, interpuso recurso de alzada indicando que, si bien había que acreditarse la convivencia, toda vez que la demandante dijo que fueron novios desde el cinco (5) de noviembre del año dos mil uno (2001) y se fueron a vivir juntos 3 meses después, es claro que en febrero inició la misma, por lo cual, al momento de la muerte sumaban más de cinco años de acuerdo al artículo 47 de la ley 100 de 1993. Expuso que no comparte la decisión de no concede la pensión pues en la investigación administrativa realizada por Porvenir, se indicó que se debía allegar sentencia en donde se acreditara la unión marital de hecho, proceso que, se encuentra en trámite en Caldas, motivo por el cual, los testigos no pudieron asistir a la diligencia del artículo 80 del CPT Y SS, pero por celeridad del proceso, la *a quo* no tuvo en cuenta los argumentos expuestos y no aplazó la realización de la misma. Lo que debió suceder, era dar aplicación al 218 del CGP en las consecuencias adversas del testigo, es decir, dar el término correspondiente para que, se aportara las razones de la inasistencia del mismo, y así poder tener los elementos suficientes dentro del proceso para demostrar la convivencia pretendida. Indicó que, quedó totalmente demostrada la convivencia sin que sea necesario remitirse a la investigación administrativa de acuerdo a lo que expuso la prima y la madre, pues con la

exposición de la aquí demandante en el interrogatorio de parte, que se equipara a una confesión en donde expresa que dejó de convivir con el causante 15 días antes porque se fue a Medellín a buscar vivienda, puede verse que si existió la convivencia hasta ese momento. Indicó que, también hay prueba que se está llevando un proceso, por lo que peticiona, se revoque la decisión de la negativa de la pensión y se conceda a favor de la demandante el 50% respectivo.

Respecto a los descuentos en salud sobre el retroactivo, explicó su inconformismo, ya que, si bien en la actualidad los dos menores están cancelando el aporte de acuerdo al 25% que les fue otorgado, se les está descontando estos aportes en salud que realizan, sin que sea dable otro pago por ello.

La parte demandada interpuso recurso de alzada en contra de la condena en costas, toda vez que, no se opuso a la prosperidad de las pretensiones y el 50% restante de la prestación se encuentra en suspenso, por ello, de no cumplir la calidad de beneficiaria, el 50% restante acrecentaría la pensión que reciben los menores y si se declara que la demandante no es beneficiaria, la entidad no tiene oposición alguna, por lo cual, no fue vencida y no es procedente la condena en costas impuesta.

ALEGATOS

Corrido el traslado para alegar, la parte accionada, reiteró que considera no hay lugar a condena en costas, en virtud de que los medios exceptivos justificaban la razón para su proposición. Además, fue claro que estos los medios exceptivos prosperaron frente a las pretensiones de la señora demandante, por lo que, peticiona se revoque la sentencia proferida en primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si la señora Cindy Yuliana Posada Rojas acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su compañero permanente Gildardo Antonio Acevedo González. De no ser así, si es

procedente ordenar el reajuste del descuento en salud a cargo de los menores beneficiarios de la prestación y resolver sobre las costas del proceso.

CONSIDERACIONES

El sistema de Seguridad social integral, con el fin de amparar la contingencia denominada “muerte” y salvaguardar así el grupo familiar de la persona que fallece y percibía en el ahora finado parte coadyuvante de los ingresos familiares, reglamentó el reconocimiento de la que denominó “pensión de sobreviviente”.

Para la verificación de tal derecho, es imperativo determinar la fecha del fallecimiento del afiliado o pensionado, pues la norma vigente para la época del hecho funesto es la que, debe aplicarse al momento de dar estudio a la procedencia o no de la prestación.

Reposa en la foliatura registro civil de defunción que da cuenta de la muerte del señor Gildardo Antonio Acevedo González, hecho ocurrido el 17 de marzo del año 2009. Igualmente, se encuentra probado que dejó acreditados los requisitos para que, sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobreviviente, pues la accionada en misiva del 28 de febrero del año 2017 reconoció la pensión de sobreviviente a los menores Yeferson Acevedo Posada y Yeison Estiven Acevedo Posada.

Teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del afiliado, se encontraba vigente la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003 que, respecto a la calidad de beneficiarios de la prestación, indicaba:

“ARTÍCULO 13. *Los artículos [47](#) y [74](#) quedarán así:*

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) *En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*

b) *En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) *Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes **y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno**; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del*

causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo [38](#) de la Ley 100 de 1993;

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente **de forma total y absoluta** de este;*

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

PARÁGRAFO. *Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”*

Es importante precisar, que este articulado ha sido objeto de numerosas explicaciones sobre el alcance de lo que el legislador ambicionó proteger, bien por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional.

En sentencia SL 1399 del 25 de abril de 2018, la Honorable Sala Laboral unificó sus sub reglas respecto del alcance hermenéutico del artículo, sobre los requisitos que debe cumplir el cónyuge o compañero permanente, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes. La importancia de la sentencia radica, en que estimó que el elemento que da vida al derecho es la convivencia, que inexorablemente debe ser de 5 años, como mínimo, sin hacer distinción sobre la calidad del causante, bien pensionado como afiliado, y delimitó la noción de convivencia así:

“Comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par

de una convivencia real efectiva y afectiva, durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”.

En sentencia SL 1730 de 2020, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que el requisito mínimo de convivencia de cinco (5) años, debía entenderse exigible solamente en el caso de la muerte de pensionado, pues la norma, no traía ese requisito para el caso del afiliado. Sin embargo, la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación a la luz de la constitución, en sentencia SU 149 de 2021 indicó que en la sentencia SL 1730 de 2020 la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional, así como el precedente judicial aplicable que no era otro que lo establecido en Sentencia SU-428 de 2016, para lo cual debió cumplir con cargas argumentativas que brillaron por su ausencia, al no exponer las razones por las cuales su postura divergente garantizaba de mejor modo los principios y valores constitucionales involucrados, pues desde la sentencia C-336 de 2014 la Corte Constitucional fue clara en indicar la igualdad de requisitos respecto a pensionado y afiliado en cuanto a convivencia se refiere, siempre afirmando la necesidad de ser *“parte del grupo familiar de quien fallece”* para acceder a la prestación, bajo la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo en sentencia SU 108 de 2020 explicó los elementos probatorios que deben estar presentes cuando se estudia la convivencia, pues puede darse el caso, que los cónyuges o compañeros permanentes no puedan cohabitar el mismo lugar, sin que ello rompa la convivencia de la pareja, pues en cada caso habrá de estudiarse las condiciones que dieron origen al rompimiento material. Esta precisión ha sido avalada por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En cumplimiento a lo expuesto es claro, que el requisito predominante para adquirir el derecho a la pensión de sobreviviente a la Luz de la sentencia SU 149 de 2021, sigue siendo la convivencia, que en caso del afiliado y del pensionado

deberá ser de cinco años, pues siendo un criterio de raigambre constitucional, su aplicación es obligatoria de cara a lo dispuesto en la Ley 270 de 1996.

Todo este razonamiento se da de cara al literal a) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003.

Ahora, toda vez que la aquí demandante de acuerdo al certificado de nacimiento que reposa en el proceso nació el 9 de abril de 1986, se tiene que para la fecha del fallecimiento del señor Gildardo Antonio Acevedo González, 17 de marzo del año 2009 contaba con 23 años de edad, es decir, una edad inferior a 30 años. Sin embargo, la pareja procreó dos hijos: Yeison Stiven Acevedo Posada, nacido el 10 de diciembre del año 2002 y Yeferson Acevedo Posada nacido el 20 de septiembre del año 2004, por ello, de cara al estudio de la procedencia de la pensión de la demandante se verificarán los requisitos del literal a; teniendo clara la posición de ambos órganos de cierre, debe decirse que bajo lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1990, la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio general, y, por tanto, esta Sala se atiene a ello, debiendo entonces la señora Posada Rojas acreditar la convivencia con el causante en sus últimos cinco años de vida.

Revisada la prueba recaudada en el proceso se constata lo siguiente:

Si bien el procurador judicial de la parte actora enunció a la *a quo* que no había podido concertar a los testigos para la fecha de la diligencia del artículo 80 del CPT Y SS, y ésta impartió su negativa de reprogramarla, también lo es que no hay duda alguna sobre la programación de la audiencia con una antelación suficiente mediante auto del 18 de febrero del año 2018, publicado por estados del día siguiente, sin que a renglón seguido se observe escrito de la parte actora indicando la imposibilidad de asistencia para dicha fecha.

Tampoco puede verse la “renuencia del testigo” de cara al artículo 218 del CGP como lo expresó el apelante, pues no se logró acreditar que la parte actora

hubiere citado al testigo con tiempo suficiente para que se hiciera presente en la dependencia judicial y más allá de ello, no puede dejar de lado esta Sala de Decisión, que el artículo 217 del CGP impone el deber a las partes de la asistencia de los testigos así:

“La parte que haya solicitado el testimonio deberá procurar la comparecencia del testigo. Cuando la declaración de los testigos se decreta de oficio o la parte que solicita la prueba la requiera, el secretario los citará por cualquier medio de comunicación expedito e idóneo, dejando constancia de ello en el expediente”.

De igual manera, el auto que declaro clausurado el debate probatorio se notificó a las partes por estrados sin que hubiere sido objeto de reparo alguno en la oportunidad procesal para ello.

Así mismo considera este juez plural que no hay lugar a práctica de pruebas en la instancia que nos compete, pues el artículo 83 del CPT Y SS establece con claridad:

“Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta”.

Lo acontecido en la audiencia, como se registra en el audio, el procurador judicial de la parte actora expuso que, los testigos se encontraban en la Ciudad de Pereira y por ello, no podían asistir, pues tenían la audiencia de unión marital de hecho sin remitir prueba alguna de ello, quedando clara la desidia de la comparecencia al despacho para el momento de la diligencia, y por tanto la *a quo* continuó con la diligencia sin reproche frente a su decisión.

Sobre las pruebas arrojadas:

Declaración extrajuicio de Luis Guillermo Arenas Arango y Dora Cecilia Quintero:

“Declaramos que conocemos de vista trato y comunicación personal y directa a la señora CINDY YULIANA POSADA ROJAS, desde hace quince (15) y diecisiete (17) años y dicho conocimiento lo tenemos en razón de amistad, trabajo y vecindad B) Bajo la gravedad de juramento declaramos que la señora CINDY YULIANA POSADA ROJAS convivió en unión libre desde el mes de septiembre del año dos mil uno (2001) con el señor GILDARDO ANTONIO ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.697092 expedida en Anserma, con quien compartía techo, lecho y mesa, brindándole compañía, cuidado protección y apoyo hasta el día de su fallecimiento.”

Misiva bajo radicado 2017-08-17 donde Porvenir indica:

“Realizadas las validaciones reiteramos lo informado a su poderdante en el comunicado radicado de salida 0200001142367800 del 17 de abril de 2017, hasta tanto esta Sociedad Administradora no reciba la sentencia ejecutoriada con la cual la justicia ordinaria no dirima el conflicto de beneficiarios y defina el derecho que les pueda asistir sobre la prestación a ella, quien deberá convocar a las señoras Luz Marina González Grisales y Gloria Inés Morales Grisales, familiares de nuestro afiliado, dentro de la misma, la reclamación pensional permanecerá suspendida a la espera de dicho documento judicial”.

Pese a lo indicado en esta misiva, no se puede ver en el plenario la investigación administrativa en donde se aclaren las declaraciones que allí se indican.

Absolvió la demandante interrogatorio de parte, el cual, a las luces del artículo 191 del CGP arrojó los siguientes hechos de confesión:

- Tuvieron malos entendidos como pareja en el tiempo que vivieron con la “suegra”
- Para el tiempo en que falleció el afiliado la había “mandado a Medellín”.

Si bien en lo que respecta a la acreditación del requisito de convivencia para acceder a la prestación derivada por muerte, la valoración de los medios probatorios debe realizarse de manera armónica, la parte solicitante debe exponer aquello que brinde un mínimo de convencimiento judicial que forme una decisión argumentada, claro está, en toda la prueba arrojada al plenario. En atención a eso, el derecho reclamado solo será concedido en la medida en que se demuestre en convencimiento de lo que con fuerza se asevera en el libelo genitor, pues no solo debe indicarse la calidad de compañera permanente y la convivencia efectiva, **sino, crear la certeza de ello, de no ser así, de dejar una duda razonable al juzgador, la consecuencia lógica será la negativa de lo petitionado**, como lo explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 4060 de 2019:

“Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el demandante deberá demostrar el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como regla de carga probatoria, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables, como regla de juicio al amparo de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Corolario de lo anterior, si el demandante no asume la carga que le fija el estándar, o el juez tiene dudas razonables, la consecuencia procesal será la negación de la pretensión, en tanto el requisito exigido para su procedencia no se demostró”

La declaración extrajuicio aportada, no tiene la fuerza probatoria suficiente para crear certeza de lo pretendido, pues indica de manera general una situación que debe ser probada en el proceso sin hesitación alguna.

Nótese pues, como en el presente proceso, la parte actora no cumplió con su carga probatoria que le impartía.

Sobre el concepto de deducción de aportes en salud a los menores en virtud del retroactivo ordenado, es importante precisar que el pago que se está efectuando por éstos al sistema general de pensiones y que se encuentra en un 100% a su cargo, se realiza a la fecha de la sentencia de primera instancia por la mesada del 25% que se encontraba recibiendo, y, al acrecentarse el valor de la prestación, hay lugar sobre ello, claro está al reajuste del pago del aporte en salud, sobre el 25% a cada uno restante. Esta deducción, opera por virtud de la Ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irradian el Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual el Juez al acrecentar el derecho está facultado para autorizarla, porque el pagador de la entidad administradora es el llamado a hacerla efectiva y trasladarla a la EPS correspondiente (sentencias de 21 de junio de 2011, radicado 48.003; 14 de febrero de 2012, radicado 47.378; 6 de marzo de 2012, radicado 47.528 y SL 1478 de 9 de mayo de 2018, radicado 63.512).

A juicio de la Corporación mencionada, de no efectuarse tales descuentos, se desconocerían los principios orientadores de la prestación del servicio público esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, y los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994, por ende, se confirmará tal decisión.

Respecto a la condena en costas, debe la Sala recordar, que el fondo pensional **no tenía la competencia** para resolver el asunto, pues a las luces de la Ley 1204 de 2008, debía dejar en reserva el pago de la prestación hasta tanto, no se resolviera judicialmente si la peticionante tenía o no la calidad que invocaba, motivo por el cual, no hubo oposición a la prosperidad del incremento pensional a favor de los menores.

Así las cosas, se revocará el numeral OCTAVO de la sentencia de primera instancia, pues la pasiva no fue vencida el juicio.

Sin costas en primera instancia

Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad del recurso de alzada.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar el numeral Octavo de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Confirmar la sentencia en todo lo demás.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8e5961dfbf1d8758852bfa9b12c646386f813b0c946deff604bcf7d5911f55c4**

Documento generado en 31/08/2023 02:11:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>